

Coyhaique, a treinta de enero del año dos mil veinticinco.

**VISTOS:**

Con fecha 21 de noviembre de 2024, comparece don Sebastián Alonso Astuya Chaparro, abogado, en representación de don Washington Alejandro Medina Martínez, preparador físico, ambos domiciliados en calle Gastón Adarme número 689, comuna de Coyhaique, Región de Aysén, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud de Aysén Carlos Ibáñez del Campo, representado por su Director don Juan Pablo Bravo Quintana, ingeniero comercial, con domicilio en calle Jorge Ibar número 168 de la comuna de Coyhaique, y en contra del Ministerio de Salud, encabezado por, su Ministro doña Ximena Aguilera Sanhueza, médico cirujano, ambos domiciliados en calle Mac-Iver número 541, comuna de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en los años de espera para la atención y realización de exámenes cardíacos, de instrumentos e insumos, vulnerando los derechos de don Alfredo Gallardo Hechenleitner y su hija Tatiana Gallardo, como asimismo respecto de los ciudadanos de las comunas de Coyhaique, Aysén, Cisnes, Chile Chico y Cochrane, todo lo cual estima que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 19 N° 1, 9 y 24 de la Constitución política de la República, esto es, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, el derecho a la protección de la salud y el derecho de propiedad respectivamente, solicitando, en definitiva, se acoja el presente recurso *“ordenando la inmediata destinación de médico especialista en cardiología para el hospital de Coyhaique, entrega de equipos por parte de la autoridad respectiva, como asimismo de insumos en el*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LHXQXSMZEPN

*más breve plazo, atendida la urgencia que revisten las afecciones cardiacas de los afectados y amparados. En el mismo sentido se solicita regularizar la devolución de box que ha sido entregado a otra área en perjuicio de cardiología, conforme se expresa en el presente recurso, con expresa condena en costas.” (SIC)*

Funda su pretensión en que es un hecho, público y notorio, que en la región desde hace un tiempo no se cuenta con especialistas, equipamiento ni los insumos adecuados para atender a los pacientes cardiacos como es el caso de las personas por las que se comparece. Agrega que 1.800 personas se encuentran a la espera de una ecografía al corazón y más de 500 pacientes para una consulta con un cardiólogo.

Precisa que don Alfredo Gallardo Hechenleitner, pensionado, junto a su hija Tatiana Gallardo, quienes llevan años esperando exámenes cardiológicos y en esta última oportunidad se les ha informado que el test de esfuerzo no se les podrá efectuar y éste deberá ser reprogramado una vez más, puesto que la máquina que servía para tal efecto ya ha cumplido su vida útil sin ser reemplazada a la fecha.

Menciona que con fecha 19 de noviembre de 2024 la Ministra de Salud, reconoció las altas cifras en materia de lista de espera por una consulta médica para esta patología en la región; sin contar los 1.800 pacientes que esperan por una ecografía al corazón, por el hecho de no existir un cardiólogo permanente en la región, adelantando de manera insólita que los plazos siguen siendo sin sentido de urgencia, y que se vislumbra solución recién para el mes de marzo del año 2026. En esa línea, añade que, durante noviembre de 2024, se comenzaron



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LHXQXSMZEPN

obras de implementación en la UCI Pediátrica del Hospital, reubicando para tal efecto diversos servicios, a excepción del tercer box, el que cuenta con el único test de esfuerzo de la región, un segundo ecógrafo y electrocardiógrafo, siendo todos ellos enviado al piso mecánico, que no cuenta con las condiciones necesarias para la protección de ellos, así las cosas, el contar con sólo 2 box ha implicado un hacinamiento, no otorgando a la fecha una solución tangible.

Por otra parte, indica que en la unidad cardiológica del hospital se entregan diversas prestaciones, como toma de muestras, electrocardiograma, instalación y retiro de holter de arritmia, entre otras, las que no se pueden realizar con normalidad, de forma tal que usuarios de toda la región se ven aún más afectados, retrasando la continuidad de sus tratamientos. Este servicio es igual de importante que todos los demás de la red asistencial de salud, sin embargo ha sido invisibilizado en pro de mejoras para otras áreas.

Afirma que la unidad de cardiología funciona únicamente sobre la base de operativos temporales y muy alejados, que no da abasto a la demanda asistencial regional.

En lo referente a la normativa citada, invoca como garantías constitucionales conculcadas, la consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, desde que la autoridad indica que solo a partir de marzo de 2026, podrán solucionar los problemas y afecciones cardiológicas de la comuna y región, amenazando así el derecho a la vida de sus amparados, dado la grave condición de salud de cada uno de los pacientes en listas de espera que se encuentran en lista de espera



cardiológica, equipos, insumos y personal necesario que lo atienda ininterrumpidamente.

Que igualmente, señala que en lo referente a la garantía establecida en el numeral 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, si bien, no se encuentra cautelado por la acción de Protección, es indiscutido que dicho derecho se encuentra íntimamente vinculado con la protección de la vida y la integridad física o psíquica, deben ser garantizados de manera armónica. En relación al artículo 5 de la Carta Fundamental, se desprende que los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren actualmente vigentes deberán ser considerados, citando al efecto la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece en su artículo 24, numeral 1 que los Estados Parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

Finalmente, señala que en lo referente a la Ley AUGE, estableció un Régimen de Garantías en Salud para asegurar a todas las personas residentes en el territorio nacional el acceso universal a una atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar las situaciones de enfermedad, obligando a los prestadores públicos a proporcionar planes y atenciones de salud contruidos sobre la base de ciertas prioridades sanitarias como la garantía de acceso; garantía de oportunidad; y la garantía de calidad, las que, para el caso en concreto no se cumplen. Así las cosas, estima que existe un derecho a la protección de la salud, que ha ingresado al patrimonio personal con protección y resguardo constitucional y legal, conforme al artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, que en la práctica no se cumple y por ende están siendo gravemente vulneradas.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LHXQXSMZEPN

Con fecha 27 de noviembre de 2024, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a las recurridas.

Con fecha 10 de diciembre de 2024, se agregó el informe evacuado por la recurrida Servicio de Salud Aysén, la que solicita el rechazo del recurso de la acción constitucional intentada, señalando que la recurrida reconoce como punto no controvertido, el hecho de que la Ministra de Salud, Ximena Aguilera haya reconocido un avance considerable para que en la Región de Aysén exista un profesional cardiólogo que cumpla funciones de forma permanente, sin embargo, el recurrente efectúa una interpretación antojadiza de lo sostenido por la secretaría de Estado, toda vez que, la recurrente parte de la premisa de la inexistencia absoluta de un médico cardiólogo en la región.

Señala que, otra inconsistencia presente en la acción intentada dice relación con el reconocimiento que efectúa la recurrente sobre las mejoras que han presentado algunas áreas del hospital regional, para posteriormente afirmar que se encuentra sin soluciones, tornando confuso su relato.

En lo referente a las garantías conculcadas, señala que la propia recurrente reconoce que la garantía contemplada en el artículo 19 N° 9 de la Constitución Política de la República, no se encuentra amparada por la acción de protección, de manera tal que no es posible restablecer el imperio del derecho, si se invoca una garantía ajena a las herramientas de la acción cautelar; por su parte, respecto de la garantía consagrada en el numeral 1, citando jurisprudencia al efecto, respecto a que se trata de cuestiones de políticas públicas de salud, mencionando que el Servicio no pretende desentenderse de dicha



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LHXQXSMZEPN

necesidad, sin embargo, se establece como un hecho futuro y cierto la circunstancia de cubrir dicha brecha; conjuntamente con ello, sostiene que vagamente, la recurrente alegó la vulneración del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, incurriendo nuevamente a utilizar como base de sus fundamentos la garantía del derecho a la protección de la salud, para sustentar una supuesta vulneración del derecho de propiedad.

Menciona que dentro de la Red Asistencial del Servicio de Salud, se encuentran contestes en la necesidad de contar con un cardiólogo de manera permanente, sin embargo, presenta un cuadro comparativo con el objeto de vislumbrar las atenciones cardiológicas durante los últimos 6 años, constatando que durante el año 2024 se han realizado más atenciones de consulta nueva que en cualquiera de los años anteriores; por su parte, referente a los controles, si bien la cifra ha disminuido por falta de especialista, se han adoptado las medidas para dar continuidad con los tratamientos, creando policlínicos de recetas.

Finalmente, sostiene que la recurrente no detalla la situación particular de cada uno de los representados en la acción de protección, de manera tal que al no ser claras las pretensiones y fundándose en disposiciones legales que están fuera de la órbita proteccional, se estima, carece de mérito suficiente.

Con fecha 20 de diciembre de 2024, se agregó el informe evacuado por la recurrida, Ministerio de Salud, manifestando primeramente que el recurrente entiende que la acción deducida se trata de una acción popular, dado que incide en términos generales en favor de todos los habitantes de una región, lo que constituye un error porque protege a personas determinadas.



En lo referente al fondo del asunto, sostiene que de conformidad a la normativa aplicable contenida en el Libro II del D.F.L N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, al Ministerio de Salud le corresponde formular, fijar y controlar las políticas de salud, asignándole atribuciones y funciones en materia sanitaria, concerniéndole las funciones de ejercer la rectoría del sector salud, la función de regulación y la función de supervigilancia, sin perjuicio de la función de fiscalización sanitaria que ejerce a través de Subsecretarios regionales.

Menciona que se ha modificado el Libro II en donde se seleccionaron distintos proyectos para otorgar mayor cobertura financiera a la población beneficiaria y que padece de ciertas patologías, siendo una uno de los ejes estratégicos el aportar a la resolución de las listas de espera del sector, para ello, se han implementado incentivos para promover que los profesionales de salud se especialicen y sub especialicen a través del otorgamiento de becas y programas, para dotar a los recintos de salud del país.

Añade que, entendiendo la relevancia de a dotación de personal para brindar la atención de salud en los distintos establecimientos asistenciales que conforman la red asistencial, el sector ha realizado esfuerzos sistemáticos para garantizar la calidad, oportunidad y continuidad de la atención en los establecimientos de salud, sin embargo, es necesario destacar que existen múltiples factores incidentes en la disponibilidad de profesionales y técnicos de salud, desde demandas crecientes de atención relacionadas con los cambios demográficos y epidemiológicos de la población. Destacando que, la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LHXQXSMZEPN

zona siempre ha tenido atenciones de médicos especialistas, señalando así, que el alza que se produjo durante los años 2020-2021 fue debido a una alerta sanitaria por covid-19 lo que aumentó las atenciones y en consecuencia los médicos especialistas.

Finalmente, menciona que el acto que se reprocha es la falta de médico especialista en cardiología permanente en la zona, lo que ocasiona la falta de atenciones médicas y realización de exámenes para pacientes que padecen este tipo de patología. Al respecto, señala que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional son contestes en reconocer que la protección del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, dice relación con actos positivos que amenacen, amaguen o ataquen directamente la vida de una persona, que configuren un detrimento o imposibilidad de la continuación de la vida o integridad física, por lo tanto, lo sostenido por la recurrente, carece de fundamento toda vez que se sustenta en declaraciones de la Ministra de Salud, no acreditando la real afectación de las garantías constitucionales que alega, por lo que el recurrente solo está utilizando esta vía para influir en materias de políticas públicas que corresponde a este recurrida.

Con fecha 18 de enero de 2025, se trajeron los autos en relación, y con fecha 28 de enero del mismo año, se llevó a cabo la vista de la causa, alegando el abogado don Sebastián Astuya Chaparro, por el recurso y en contra de éste, el abogado don Francisco Fernández Elgueta, por el Servicio de Salud de Aysén y la abogada doña Javiera Villegas Soto, por el Ministerio de Salud, quedando aquella en estado de acuerdo.

#### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LHXQXSMZEPN



**PRIMERO:** Que, en la materia que nos ocupa, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: *“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”*

**SEGUNDO:** Que, en ese ámbito, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

**TERCERO:** Que, en tal orientación, como aparece de su propia definición, es requisito *sine qua non* de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y



que, como consecuencia del mismo, se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

**CUARTO:** Que, a fin de centrar el análisis de esta Corte, se debe precisar que la circunstancia calificada de ilegal y arbitraria por el recurrente, consiste en la omisión de contar con un médico especialista permanente en cardiología en el Hospital Regional de Coyhaique y con equipos e insumos para atender pacientes cardíacos, sumado a la falta de espacio, al eliminar el box 3 de esta área, manifestando la autoridad respectiva que estos problemas podrían tener solución en esta región, solamente a partir de marzo de 2026, lo que perturba gravemente el derecho a la integridad física y psíquica de los recurrentes, amenazando el derecho de a la vida, dada la grave condición de salud de los pacientes en lista de espera cardiológica, como también el derecho a la protección de la salud y de propiedad, todo lo cual estima que conculca las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 9 y 24 de la Constitución Política de la República, pidiendo la inmediata destinación de médico especialista en cardiología para el referido hospital, la entrega de equipos e insumos por parte de la autoridad respectiva, en el más breve plazo y la devolución de box que ha sido entregado a otra área en perjuicio de cardiología.

**QUINTO:** Que, desde luego, se debe desestimar el presente arbitrio constitucional, porque lo solicitado en el recurso efectivamente se encuentra dentro del ámbito de las políticas públicas de salud, cuyo ejercicio corresponde a la administración, en específico, a las



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LHXQXSMZEPN

recurridas, por lo que la asignación de recursos hospitalarios escapa de los márgenes de conocimiento de este recurso, de naturaleza cautelar y extraordinaria.

**SEXTO:** Que, sin perjuicio de lo anterior, se advierte que la acción de protección que se conoce ha perdido oportunidad, toda vez que la base de ésta consiste en la falta de un médico cardiólogo en el hospital regional, manifestando en el abogado representante del Servicio de Salud recurrido, en los alegatos vertidos en esta instancia, que durante el mes de marzo del presente año se integrará a dicho establecimiento el cardiólogo, Alejandro Fleming Meza, lo que consta en publicación del diario de la Región de Aysén, El Divisadero, de fecha 14 de enero de 2025 y en la copia de correos electrónicos que dan cuenta de las comunicaciones entre el Director del Servicio de Salud de Aysén y el médico antes referido, adjuntado a la minuta de alegatos, por lo que habiendo la recurrida gestionado la contratación de personal médico, resulta inoportuno adoptar medidas urgentes por parte de esta Corte para tales efectos.

**SÉPTIMO:** Que, asimismo, aparece que el recurso intentado en autos reviste caracteres de acción popular, por cuanto se refiere omisiones genéricas que afectan los derechos de los ciudadanos de las comunas de Coyhaique, Aysén, Cisnes, Chile Chico y Cochrane, a saber 1.800 personas que esperan una ecografía al corazón y 500 una consulta para un cardiólogo, amenazando el derecho a la vida de éstos, dada su grave condición de salud, lo que no resulta procedente, desde que este instrumento de emergencia ha sido previsto para “el que” por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LHXQXSMZEPN

derechos y garantías constitucionales, es decir, en favor de personas claramente determinadas e individualizadas, lo que no ocurre en la especie, máxime si las peticiones concretas formuladas no se singularizan en los recurrentes en forma particular.

En este sentido la Excma. Corte Suprema, ha considerado que: *“Segundo: Que, por lo mismo, es exigencia de la referida acción acreditar la legitimación activa del amparado, puesto que es menester para su procedencia la existencia de un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona determinada que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, desde que, como se ha sostenido reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección no constituye una acción popular, sino que corresponde al directamente lesionado con el acto u omisión que se reclama, pudiendo otro comparecer en su representación o a su nombre.”* (recurso de protección, Rol N° 31.897-2017)

**OCTAVO:** Que, no obsta a lo antes concluido, la referencia en el libelo recursivo a los recurrentes don Washington Alejandro Medina Martínez, don Alfredo Gallardo Hechenleitner y su hija Tatiana Gallardo, desde que se ha presentado de manera difusa respecto de éstos, puesto que del primero nada se especifica y de los dos últimos expresa solamente que “llevan años esperando exámenes cardiológicos y en esta última oportunidad se les ha informado que el test de esfuerzo no se les podrá efectuar y éste deberá ser reprogramado una vez más, puesto que la máquina que servía para tal efecto ya ha cumplido su vida útil sin ser reemplazada a la fecha.”, lo



que no se ha justificado en autos como tampoco la grave situación de salud que amenace el derecho a la vida ni la propiedad de aquellos.

**NOVENO:** Que, en virtud de lo expresado en los motivos anteriores, deberá necesariamente desestimarse el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, **SE RECHAZA**, sin costas, la acción de protección deducida por don Sebastián Alonso Astuya Chaparro, en representación de don Washington Alejandro Medina Martínez y en favor de don Alfredo Gallardo Hechenleitner y su hija Tatiana Gallardo, como asimismo respecto de los ciudadanos de las comunas de Coyhaique, Aysén, Cisnes, Chile Chico y Cochrane, en contra del Servicio Salud Aysén Carlos Ibáñez del Campo, representado por don Juan Pablo Bravo Quintana, y en contra del Ministerio de Salud, representado a su vez, por doña Ximena Aguilera Sanhueza.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol Corte N° 269-2024 (Protección).



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LHXQXSMZEPN



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LHXQXSMZEPN

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Luis Moises Aedo M. y los Ministros (as) Jose Ignacio Mora T., Natalia Rencoret O. Coyhaique, treinta de enero de dos mil veinticinco.

En Coyhaique, a treinta de enero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LHXQXSMZEPN